

COLOMBIA

Proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas para 2012 establecen una población indígena cercana a los 1.450.000 habitantes (3,5% de la población nacional). Con 87 pueblos y 65 lenguas diferentes, Colombia es, después de Brasil, el país con mayor diversidad étnica en América. Aproximadamente una tercera parte del territorio nacional es propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas en calidad de “resguardos”. Gran parte de los territorios indígenas están siendo intervenidos por empresas petroleras, mineras y economías de plantación (banano, palma, coca) que afectan severamente la vida de las comunidades indígenas. Existen dos organizaciones que representan a nivel nacional a un alto número de comunidades: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). También existen varias organizaciones macroregionales como la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Confederación Indígena Tairona (CIT). La constitución política de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT (hoy Ley 21, de 1991). Colombia, después de haber votado en contra, suscribió en 2009 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano tomar medidas para proteger la vida de 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural, debido al conflicto armado interno.

El clima político de Colombia en el año 2012 se asemeja al clima de Bogotá. Mañanas con cielos despejados, que vaticinan días espléndidos, terminan repentinamente cargándose de nubarrones desatando tormentas al final de la tarde. También para el gobierno de Juan Manuel Santos el año empezó con buenos augurios. La razón: Santos se la había jugado por la ley de víctimas y la restitución de tierras a los desplazados por la violencia, y adelantaba en la Habana (con total hermetismo) conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acordar una agenda de paz que llevara a la desmovilización de la principal fuerza guerrillera del país y la más antigua de América. Pero a finales del año este panora-



ma radiante se había ensombrecido. Los procesos están cargados de obstáculos y no avanzan con la velocidad que el país lo requiere para reparar injusticias históricas y poder adelantar un proceso de reconciliación para el desarrollo de una sociedad más justa y moderna. Y es que la violencia padecida por el país a lo largo de las últimas décadas había vulnerado severamente las condiciones de seguridad para todos los colombianos y afectado con especial gravedad los derechos de los grupos étnicos y de las personas más pobres del campo. Pero en vez de un proceso más acelerado

de resarcimiento, como se esperaba, la perniciosa relación entre el Estado y grandes empresas para emplazar la locomotora extractivista de la megaminería, comenzó a mostrar sus estragos en los territorios y la gobernabilidad de los pueblos indígenas. A este estado de cosas se sumó que el anterior presidente Uribe, hostil a la reparación de las víctimas de la violencia, desplegara una propaganda sórdida contra el gobierno de Santos, cuando a mitad del año el país se enteró de que el gobierno iniciaría un proceso de paz con las FARC. Al descontento de las víctimas por los precarios avances en materia de reparación y restitución, y al rechazo de campesinos y organizaciones de indígenas y negros a los proyectos mineros, se unían contra Santos las huestes del ex presidente Uribe, que como los ganaderos y los nuevos terratenientes urgidos por legalizar tierras usurpadas, se sienten amenazados por las negociaciones de paz.¹ Cuando en noviembre Colombia perdió en la Corte Internacional de Justicia de La Haya un litigio con Nicaragua que le quitaba al país cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de mar, las tormentas políticas de fin de año no demoraron en desatarse, con resultados desastrosos para la imagen del presidente Santos. Si a comienzos de 2012 gozaba de un 80% de favorabilidad en las encuestas, terminando el año escasamente llegaba al 50%.

En esas circunstancias dudamos que Santos logre cumplir su sueño de immortalizarse como el presidente que hizo la paz e inició la modernización del Estado colombiano. Por el contrario, pasará a la posteridad como el epígono de Uribe, que continuó con las tareas de pauperizar el campo y desarraigar a la población indígena, negra y campesina.

El proceso de paz

Casi todos los colombianos hemos visto con beneplácito el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Varios factores alientan este proceso y lo vuelven casi irreversible. Primero, porque para el gobierno la salida militar, aunque puede ser una opción, tendría que asumir la prolongación de una guerra irregular, que según los analistas ha impedido en un 1% el crecimiento del PIB del país en los últimos 20 años, sin tener en cuenta el costo en vidas humanas, destrucción de infraestructura, fuga de capitales, aumento del gasto improductivo y, por último, la incertidumbre conexas al proceso de que la solución militar no soluciona los problemas que originaron el conflicto. Segundo, porque una vez iniciadas las negociaciones, para Santos resulta decisivo consolidar avances importantes en el proceso, con miras a mejorar su desvenecada imagen de cara a las elecciones de 2014. Tercero, porque las FARC han entendido que aunque no han sido derrotadas, han

perdido sus principales dirigentes. Sobre todo han comprendido que la correlación de fuerzas les es desfavorable y que el momento es oportuno para resolver por la vía política el conflicto bélico. Y son conscientes de que llegan divididas al proceso, pues en la mesa de negociaciones no están representadas todas las fuerzas de la organización guerrillera. El Bloque Sur comandado por dos líderes históricos de las FARC, Joaquín Gomez y Fabián Ramirez y el Bloque Occidental que dirige el también histórico comandante Pablo Catatumbo, se encuentran en abierta oposición al proceso de paz.

Pero si este proceso es irreversible, no podemos desconocer la oposición que tiene de aquellos sectores que le apuestan al fracaso de las negociaciones. En primera línea el ex presidente Uribe y sus huestes terratenientes, que ven las negociaciones como una traición a la política de “Seguridad Democrática” del gobierno de Uribe y que Santos había prometido continuar. En segundo lugar los sectores que se han beneficiado del despojo de tierras en las dos décadas anteriores, la mayoría de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. En tercer lugar, aquella clase política de extrema derecha tradicional que ve estas negociaciones como una impostura de las FARC, que se aprovecharían de un gobierno frágil. Por último están aquellos que han lucrado con la guerra y no quieren perder los dividendos que ella ofrece. Entre todos hay divergencias pero también vasos comunicantes; sobre todo se han puesto de acuerdo para desplegar una propaganda negra en contra del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC. El mayor beneficiado de esta campaña contra el proceso de paz es el ex presidente Uribe, que aspira a retornar al poder, después de 4 años de abstinencia. Pero los de “a pie” tampoco han estado quietos: a comienzos de 2012, cerca de 30.000 campesinos, la mayoría de ellos desplazados, se concentraron en Necoclí (Urabá, Antioquia), para respaldar la política de restitución de tierras del gobierno y protestar por los asesinatos de líderes de las organizaciones por la restitución de tierras. Para finales de año se realizó otra concentración con cerca de 4.000 personas en Puerto Asís (Putumayo). Estas acciones ciudadanas por la defensa y reparación de las víctimas del conflicto han desembocado en una alianza de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, llamada “Colombia sin heridas”, que va a jugar un papel importante en 2013 para contrarrestar a los adversarios de la restitución de tierras.

Los indígenas y el proceso de paz

La historia de Colombia en estas últimas dos décadas ha estado marcada por procesos violentos, vinculados a la disputa por la tierra y el control de los recursos natura-

les. El ascenso del paramilitarismo y su inserción en la política, el involucramiento de las FARC con el narcotráfico y su expansión militar para controlar zonas de cultivo y rutas de comercialización, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, la complicidad de sectores del empresariado rural con la usurpación de tierras para cultivos de plantación, la lucha por el control de los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética, ha impactado drásticamente a los territorios de campesinos, negros e indígenas. No se puede, entonces, objetar que sean ellos los más interesados en que cese el conflicto armado, que no sólo tiene como epicentro sus territorios, sino que sus vidas y organizaciones se encuentran también seriamente amenazadas por estar en medio del fuego cruzado. De allí que la cuestión agraria sea el primer y más difícil tema de la mesa de negociaciones, pues es el núcleo del histórico conflicto político armado colombiano. Los indígenas han manifestado reiteradamente que el conflicto por la tierra y por los recursos ha agravado la situación social en el campo. Igualmente, han manifestado que la forma de abordar estos problemas y de buscar caminos de solución por vía de la lucha armada ha exacerbado la exclusión e inequidad social y económica de la población rural, conduciendo al desangre social de las comunidades por la vía de la fuga juvenil hacia las economías que genera el narcotráfico o para engrosar las filas de sectores armados. El remedio resultó siendo peor que la enfermedad. Es por eso que saludan las negociaciones de paz para ponerle fin al conflicto armado. Pero un cese del conflicto no significa que se solucionen los conflictos sociales y económicos. Pero sí se abren nuevas posibilidades de redefinir relaciones sociales y políticas, pues si se consigue la exclusión definitiva de las armas en los conflictos sociales, se abre el espacio político para la transformación de la sociedad.

En el esquema previsto para las negociaciones no está contemplada la participación de la sociedad civil, pues lo que se busca es un cese al fuego definitivo y el abandono de las armas por parte de las FARC. En contraprestación, el gobierno brindaría a la insurgencia todas las garantías para que incursionen en la vida política legal del país. “La paz no significa que las FARC depongan sus ideas sino que sigan luchando por ellas en democracia”, dijo el jefe de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, afirmando que el grupo insurgente podría ser catalizador de las políticas de restitución de tierras y otras medidas del gobierno -como contradictor político- asegurando que el propósito del gobierno en las negociaciones es transformar a las FARC en una “fuerza política, en un partido político”.²

Aunque los negociadores de ambas partes hablan en nombre del país, en especial de los indígenas y campesinos, las organizaciones indígenas más importantes, principalmente el CRIC, han expresado que no se sienten representados ni por el gobierno ni por las FARC.³ No obstante, la mesa de negociación -en especial las

FARC-, han hecho saber que valoran la contribución que puede darse desde las organizaciones indígenas y agrarias para la construcción de propuestas. En esa dirección, la mesa de negociación Gobierno–FARC promovió, a finales del año, un foro sobre Desarrollo Agrario Integral, coordinado por la Universidad Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Colombia). A este foro se hicieron presentes más de mil organizaciones del campo, incluidas las que representan los intereses de indígenas y afrocolombianos. La sistematización de cerca de 500 propuestas constituyó un insumo fundamental para la mesa de negociación. Se trata de una contribución de gran valor político y alto grado de autoridad ante las partes. Entre las propuestas que llegaron a la mesa de negociación se encuentran las de: a) reformular una política agraria con enfoque territorial y ambiental; b) reconocer la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes y c) asumir la obligación constitucional referida al apoyo a la economía campesina y entender que un conflicto armado originado y desarrollado en el campo exige con prioridad la construcción de estrategias y medidas tendientes a superar las causas y las circunstancias del conflicto. Por su parte, las FARC han anunciado que tendrán en cuenta este “mandato” de las organizaciones agrarias, haciendo alusión a la necesidad de una reforma agraria que implique, entre otros aspectos: a) un acceso y redistribución de una propiedad agraria altamente concentrada; b) el establecimiento de límites a propietarios nacionales y extranjeros; c) la erradicación de la pobreza rural; d) el estímulo a la economía campesina y el mejoramiento de la infraestructura rural, y e) reconocer la definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes e interétnicos.⁴

No se tiene certeza de cómo las FARC decantarán su propuesta en materia agraria a partir de estos enunciados generales. Lo que nos aventuramos a decir es que lo manifestado por ellas hasta ahora es realista y sensato. Por otro lado, no deberá ser difícil apropiarse los recursos económicos para realizar una reforma agraria como la propuesta. En los ocho años del ex presidente Uribe se destinaron más de 80 mil millones de dólares a la guerra. Con la mitad de esos recursos se podría financiar un plan de reforma agraria y de desarrollo rural como el planteado por las FARC. El balón está pues en la cancha del gobierno.

¿Recolonización de los territorios indígenas?

Así como la guerra se mantiene de forma paralela a las negociaciones de paz, también la política extractivista sigue adelante, a pesar de que el primer y más importan-

te punto de la agenda de negociaciones es precisamente el agrario, donde uno de los aspectos más destacados de la discusión es la reformulación de una política agraria con enfoque territorial y ambiental, reconociendo la autonomía y los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes a sus territorios y bienes naturales.

En la mesa de negociaciones se discute sobre los derechos de los pueblos étnico-territoriales a proteger y blindar sus territorios de la avalancha minera, y las FARC abogan por la autonomía de los indígenas, campesinos y afrocolombianos en el manejo de los recursos naturales en sus territorios; algo inverosímil hace un par de años. Pero lo que sorprende es que mientras las FARC dan esta voltereta, haya liderazgos indígenas (por fortuna pocos) que promuevan abiertamente la explotación minera en sus resguardos. Los líderes que así proceden se escudan en el mal estado social y económico en que se encuentran sus pueblos, pues mientras el resto de la sociedad se moderniza y soluciona sus problemas, en sus comunidades crecen los apremios en salud, nutrición y educación y sus deteriorados territorios ya no tienen la capacidad de garantizarles la alimentación. Esta situación viene creando malestares y discordias en las comunidades; más aún, viene dividiendo a las organizaciones.⁵ Preocupa, sin embargo, que los territorios indígenas estén siendo invadidos por este fenómeno de la minería, que no dudamos en caracterizar como la moderna colonización. Mientras esto sucede en las comunidades, las cúpulas de algunas organizaciones, con fuertes dosis de retórica indigenista, envuelven a las comunidades con un manto fundamentalista que satisface los anhelos de dignidad y las necesidades de valoración social y política, pero que poco aportan al fortalecimiento de las comunidades para enfrentar los problemas reales que tienen con los mineros de todas las laderas (grupos ilegales pequeños, medianos y grandes).

Las divergencias con el Estado reaniman al mundo indígena

La visión integral que tienen los pueblos indígenas y sus formas fraternas de relacionarse con la naturaleza son analizadas por el movimiento ambientalista como alternativas valiosas para sostener la biodiversidad del planeta. Últimamente vienen oponiéndose con vehemencia a la explotación de minerales e hidrocarburos en sus territorios. Este discurso y acciones de los indígenas en defensa de sus territorios han colocado los derechos de la naturaleza en el mapa de los derechos humanos pues, como las organizaciones indígenas sostienen, los daños irreversibles a la naturaleza deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad.

Este discurso tiene una importancia proverbial, y no le quita validez el hecho de que algunos dirigentes, comunidades o pueblos se hayan apartado de él y estén siendo arrollados por empresas extractoras de recursos. Pero también por el Estado, que busca afanosamente desprestigiar a aquellas organizaciones indígenas, que son las que precisamente critican las ligerezas de algunos dirigentes y defienden el derecho a la consulta previa.⁶ El Estado prefiere tratar con organizaciones locales, resguardos y dirigentes frágiles a fin de “comprar” su consentimiento, desdeñando las sensatas apreciaciones de organizaciones indígenas y afrocolombianas que critican el modelo de desarrollo económico y políticas agrícolas y minero-energéticas sin consideración ambiental. El Estado nunca ha estado dispuesto reconocerles un tratamiento diferenciado en razón de sus culturas y sus formas diversas de convivir con la naturaleza.⁷ El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, por ejemplo, ha sido considerado un privilegio inaceptable. Y poco más o menos que se define como traición a la patria las tutelas interpuestas que tumbaron leyes tan importantes para el Estado como la Ley de Desarrollo Rural y la Ley Forestal, que lesionaban las economías y territorios de los pueblos indígenas. Estas leyes fueron finalmente declaradas inexecutable por la Corte Constitucional por no haber sido consultadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos. Este apoyo de las altas cortes a los pueblos indígenas los ha alentado a continuar en esa larga lucha de hacer respetar sus derechos. Estos son hechos que han reanimado al mundo indígena colombiano, que ve la necesidad de mejorar las áreas de la comunicación para contrarrestar la campaña de desprestigio que es movida en su contra por el gobierno y que es reproducida por los medios de comunicación afines. En este sentido, es meritorio destacar el Foro Nacional de Comunicación Indígena que se realizó en el Cauca, y que reunió a más de 700 participantes entre autoridades tradicionales, organizaciones, procesos, redes, prensa independiente y tejidos de comunicación. En este evento participaron también agencias de comunicación amigas de México, Perú y Ecuador.

Por otro lado, Bogotá ha sido sede de eventos que han contribuido también en la reanimación política que vive el movimiento indígena colombiano. Por su importancia en la divulgación de lo que sucede en la vida de los pueblos indígenas, se destacó el XI Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas que, con el lema “*Por la vida, imágenes de resistencia*”, convocó a 50 países invitados, exhibiendo 65 producciones audiovisuales, 30 muestras especiales de cine y vídeo, conciertos de integración, actividades artísticas y culturales y diversos foros políticos y académicos. El festival tuvo como objetivo fortalecer los procesos de comunicación de los pueblos indígenas y promover la producción audiovisual como herramienta de divulgación de la realidad de los derechos indígenas. En el marco de este festival se realizó el Foro

de Política Pública Internacional. Después de la clausura, el 30 de septiembre, diversas muestras de películas fueron trasladadas a Medellín. El festival en Medellín, organizado por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Coordinación de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI), contó con diversos espacios públicos de análisis y opinión, tendientes a visibilizar la realidad que viven los Pueblos Indígenas y la afectación de sus derechos por la actividad minera.

Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia

En este contexto político, cerca de 5.000 indígenas de 28 departamentos se reunieron en Bogotá, del 7 al 12 de octubre, para celebrar su VIII congreso nacional. Los debates más significativos giraron alrededor de los temas de los territorios indígenas y su defensa frente a los proyectos minero-energéticos, el conflicto armado que ha dejado graves secuelas en la vida e integridad de las comunidades y, por supuesto, el proceso de paz y las negociaciones que el gobierno adelanta con las FARC.

De acuerdo a los mandatos del VIII Congreso Nacional de la ONIC, el Consejo de Gobierno que liderará la organización nacional en el período 2012-2016, tiene como reto fundamental reafirmar en todo el territorio la unidad del Movimiento Indígena Colombiano para resistir las políticas de agresión que sufren sus comunidades por parte de actores armados y la avalancha de proyectos económicos extractivistas que amenazan los territorios y vulneran los derechos y las libertades políticas de los pueblos indígenas de Colombia. El Consejo directivo quedó liderado por el Consejero Mayor Luis Fernando Arias, del pueblo Kankuano. ○

Notas

- 1 Las FARC proponen, para devolver tierra a los campesinos, constituir un “Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”.
- 2 En rueda de prensa en octubre durante la inauguración de los diálogos en Oslo.
- 3 “Decimos de las FARC que no nos representan, en la medida en que consideramos que el conflicto armado y la actuación de la guerrilla dentro del mismo han sido un mal mayor que los males que proponen solucionar; igual planteamos respecto al Estado, en la medida en que a pesar de que tenemos derechos... estos son en gran parte violados e incumplidos..., además han utilizado el conflicto armado para acallar y debilitar la lucha social y política por estos derechos”. (Extracto de un comunicado del CRIC sobre el proceso de paz).

- 4 La propuesta de *territorios interétnicos*, que fue recogida en las conclusiones del foro sobre Desarrollo Agrario Integral, fue trabajada y presentada por varios participantes afrocolombianos, indígenas y campesinos de la región del Pacífico, principalmente del río Naya.
- 5 La división que experimenta la Organización Indígena de Antioquia (OIA), tendría este trasfondo. No hace poco las comunidades del resguardo de Docabú (Risaralda) destituyeron a su gobernador por permitir la entrada de empresas mineras al resguardo, a cambio de sumas irrisorias de dinero.
- 6 Según el gobierno, los indígenas han convertido la consulta previa en una especie de “veto”, transformándola en un “escenario de negociación”, donde los dirigentes buscarían sólo sacar provechos personales (viáticos, hoteles de primera y otras prebendas del gobierno).
- 7 Esta actitud es aún más reprochable por cuanto han sido precisamente los planteamientos ambientalistas de los movimientos indígenas en América, y de otros continentes, los que vienen coadyuvando a la toma de conciencia a nivel global sobre los graves perjuicios de la explotación ilimitada de los recursos naturales y ambientales del planeta.

Efraín Jaramillo Jaramillo, antropólogo del Colectivo de Trabajo Jenzera. Ha acompañado planes de etnodesarrollo con varios pueblos indígenas de Colombia. Con otros colaboradores de las luchas indígenas por la tierra, orienta la Escuela Interétnica para la Resolución de Conflictos, que propugna por la creación de Territorios Interétnicos en varias regiones del Pacífico.